Antonio Ramírez de Arellano, en una imagen de archivo. SUR

El PSOE-A pide retirar el decreto que simplifica trámites por falta de consenso

Socialistas y Adelante Andalucía critican la norma por «beneficiar a unos pocos» y no haber contado con sindicatos, comerciantes y consumidores

JOSÉ LUIS PIEDRA

SEVILLA. El PSOE-A pidió ayer al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos la retirada inmediata del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía aprobado este lunes por «no haber sido consensuado con los agentes socioeconómicos y beneficiar a unos pocos a costa de los demás», según sostuvo el portavoz de Hacienda del grupo parlamentario socialista, Antonio Ramírez de Arellano. El también exconsejero socialista de Economía y Hacienda criticó la ausencia de diálogo y negociación del Ejecutivo de Juanma Moreno para elaborar esta norma y señaló que «de manera inmediata han salido sindicatos y consumidores a decir que no han sido consultados ni conocen nada de este proyecto».

Según el parlamentario socialista, «un gobierno responsable debería retirar el decreto y sentarse a hablar de verdad con las entidades interesadas y los agentes sociales, con los colectivos afectados por los cambios normativos y con la oposición para ver qué aportaciones se pueden realizar». Ramírez de Arellano lamentó la falta de información sobre este decreto, cuya elaboración tildó de «ejercicio de funambulismo y de falta de rigor que viene a crear inseguridad jurídica porque ninguno conocemos ese decreto, sólo la propaganda que se hizo del mismo», precisó.

Además, censuró que no se conozcan «los informes jurídicos, técnicos ni presupuestarios» que deberían acompañar a este decreto y que deberían estar en las páginas de Transparencia de la Junta, indicó.

Ramírez de Arellano criticó la falta de interlocución con los agentes socioeconómicos y cuestionó «si el pequeño comercio ha sido consultado sobre esta norma que impulsa medidas de liberalización de horarios para superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados» y añadió que «se quiere beneficiar a determinados y muy concretos negocios».

El portavoz de Hacienda socialista advirtió también de que la norma no solo se refiere a la reducción de trámites administrativos sino también a controles, lo que «requiere un análisis fino porque son cuestiones muy delicadas», como hablar de relajar los controles alimentarios después de los sucedido por Magrudis y el brote de listeriosis. A su juicio, «esta norma requiere de un debate y un contacto con los interesados y no debería ser objeto de propaganda y frivolidad».

PP-A y Cs defienden las bondades del decreto por suponer «una alfombra roja para la inversión y el empleo»

Además, recordó que «la eliminación de trabas no es ajeno a la acción de gobierno del PSOE» en Andalucía en los últimos años, y al respecto ha señalado que, en 2014, el Ejecutivo socialista de entonces aprobó «un importante decreto que procuraba eliminar las trabas para el establecimiento de negocios», pero que fue «profusamente debatido con todos los agentes».

IU rechaza el «decretazo»

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, coincidió con los socialistas en cuestionar el nuevo decreto por suponer «un negocio para unos pocos». Valero puso como ejemplo que ese negocio va a ser «a costa de los pequeños comerciantes, que están desprotegidos, ya que se pretenden liberalizar más los horarios comerciales a favor de grandes superficies».

El dirigente de IU calificó la iniciativa como «decretazo» y añadió que supondrá «volver a la cultura del pelotazo del ladrillo, en detrimento de la conservación medioambiental, algo que dejó el litoral esquilmado». En su opinión, «es una absoluta temeridad quitar la regulación que protege el medio ambiente, lo que conlleva un factor propiciador de la corrupción». Además, Valero criticó que esta iniciativa «ha venido de la mano del sector privado y agregó que «no se puede gobernar para la patronal, sino para el pueblo andaluz». A este respecto, afirmó que «es necesario hablar con todos, no sólo con la patronal, sino también con los sindicatos y con organizaciones».

Por su parte, PP-A y Cs coincidieron ayer en resaltar las bondades de esta norma por suponer «una alfombra roja para la inversión y el empleo», mientras que Vox anunció que «habrá muchos cambios en los puestos de trabajo en la Administración autonómica que habrá que reubicar» con este decreto.